

Cuadernos del Sur

AÑO 11 N° 19

Junio de 1995

Editorial: Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

ARGENTINA 1995: ¿UNA NUEVA HEGEMONIA?

Alberto Bonnet

«Sólo gracias a aquellos sin esperanza, no es dada la esperanza» W.Benjamin.

Aclarando las preguntas

Es relativamente sencillo escribir sobre aquello que fue publicitado en las campañas electorales, sometido a votación y votado en la Argentina el 14 de Mayo. Se trataba de modelos de gestión y de gestores: los gestores del PJ obtuvieron casi un 50% de los votos, los del Frepaso un 29% y los de UCR un 17%, porcentajes que indican que el modelo de gestión y los gestores actuales no serán reemplazados, nos informaron los periódicos.

Menos sencillo -aunque mucho más interesante- resulta indagar aquello que no fue discutido en las campañas, ni decidido en las urnas, ni expresado en las votaciones. El principal desafío no consiste en interpretar lo votado en las elecciones, sino en entender lo no votado en ellas los mecanismos que permitieron de antemano sustraerlo de las campañas y las urnas.

Precisemos un poco más las cuestiones. Podemos admitir sin mayor audacia que aquello sustraído de la votación fué, por excelencia, la convertibilidad y, más radicalmente, la reestructuración de aspectos fundamentales de la economía y la sociedad argentinas.¹ Pero la pregunta pasa entonces a ser: ¿cómo es que la convertibilidad y la reestructuración capitalista fueron sustraídas de las discusiones y de las decisiones?. O incluso, habida cuenta de que el compromiso de no modificar el rumbo fue explícitamente aclarado por los grandes partidos: ¿por qué la gran mayoría de los argentinos las convalidó tácitamente en el momento de emitir su voto?. Estas preguntas remiten a nuevas preguntas, a problemas que trascienden ampliamente la coyuntura electoral de Mayo y no pueden resolverse invocando engaños, traiciones, fallidas unidades populares, ausencia de un partido revolucionario de masas, dólares invertidos en las campañas electorales, polarizaciones, nueva constitución, reglamentos electorales y otras hierbas que proliferan en el microclima electoral.²

La convertibilidad y la reestructuración económica y social en curso consti-

tuyen una ofensiva, sin precedentes en la historia argentina, contra las condiciones de vida de los trabajadores. Sin precedentes son la actual distribución de la riqueza (los salarios representan apenas un 20% del PBI), el monto del salario real (1/3 del vigente hace veinte años), el número de habitantes en la miseria (unos 10 millones), de niños desnutridos (1 millón) y desempleados (2 millones). El plan de convertibilidad fue lanzado por Cavallo hace más de cuatro años y la reestructuración capitalista, considerada en su versión más acelerada y profunda, viene desarrollándose desde que Roig anunciara la reforma del estado, casi dos años antes. El contraste entre ambos aspectos, a saber, el exitoso desempeño de la reestructuración capitalista por un lado y sus catastróficas consecuencias sociales por el otro, merece una explicación. Los socialistas revolucionarios no podemos soslayar incómodas preguntas como las siguientes: **¿cómo se explica la hegemonía lograda por la burguesía alrededor de estas políticas? ¿Estamos ante una nueva hegemonía de largo plazo? y ¿cuáles serían los límites de semejante hegemonía?**. Soslayar estas preguntas sería renunciar implícitamente a interpretar la coyuntura y, en consecuencia, a la práctica política destinada a transformarla.³ Voy a proponer en las siguientes páginas algunas ideas que, según espero, sirvan para comenzar a encontrar respuestas. El atentado contra la esperanza, perpetrado por el menemismo durante los últimos años, está dejando secuelas en los socialistas. Hay quienes caen en el escepticismo y renuncian a explicar una realidad que afecta demasiado sus creencias; hay quienes se refugian en el dogmatismo, reafirmando sus creencias y amontonando principios generales y superficialidades de la coyuntura en sus intentos de explicar aquello que las contraria. Las ideas que siguen, en este marco, están de antemano condenadas a ser provisorias y a operar grandes reduccionismos. El intento de explicar cualquier realidad nueva comienza, necesariamente, con unas exageraciones endebles que sólo pueden ser evaluadas y desarrolladas en posteriores debates.

1. Volvamos a la inflación

La primera idea que quisiera proponer apunta a entender la naturaleza de ese descalabro de precios que tantas veces padecimos y conceptualizamos como inflación. **La inflación es lucha de clases, desarrollada alrededor del valor del dinero y expresada en la estructura de los precios relativos.** Esta idea me servirá más adelante para entender el período que va desde abril de 1989 hasta marzo de 1991 y, a partir de dicha coyuntura, la génesis y las características de la hegemonía burguesa expresada políticamente por el menemismo.

Es sabido que, en nuestro medio, los economistas suelen acordar en la definición de la inflación: pérdida de valor del dinero en relación a las demás mercancías, acompañada a veces de modificaciones en los precios relativos entre los

distintos tipos de mercancías, mas suelen dividirse acerca de sus causas. Los monetaristas sostienen que son inflacionarios los aumentos de salarios que superan los incrementos de la productividad, el estímulo de la demanda mediante el crédito barato y el financiamiento del déficit presupuestario y de otros déficits motivados en políticas de bienestar social y desarrollo económico emprendidas por el estado, mediante emisión. Los estructuralistas, en cambio, sostienen que la inflación resulta de un encadenamiento de factores entre los que se destacan las rigideces de la producción agropecuaria, la restringida capacidad de importar bienes de capital, el insuficiente desarrollo de las industrias de base y de la infraestructura y el carácter endémico del déficit fiscal resultante de las deficiencias anteriores.⁴

Esta definición y estas explicaciones de la inflación me parecen, sin embargo, insuficientes porque reproducen el fetichismo del dinero. La inflación debe definirse más bien como una modificación de los precios relativos realizada a través de una alteración general de los precios y explicarse como una expresión de la lucha de clases. Esquemáticamente, podría decirse lo siguiente. Ante dificultades en el proceso de valorización del capital para determinada fracción de la burguesía en la esfera de la producción, la fracción burguesa en cuestión intenta mantener su tasa de ganancia en la esfera de la circulación, aumentando los precios de las mercancías que produce. Ese es el puntapié inicial de la inflación. El desarrollo posterior, sin embargo, nunca está predeterminado. Puesto que es inherente al capitalismo el antagonismo entre la racionalidad desde una perspectiva particular (el interés de esa fracción de la burguesía) y la racionalidad general (la continuidad del proceso de reproducción capitalista en su conjunto), este aumento de precios motivará aumentos de precios en otras mercancías, que suprimirán la ventaja que esa fracción de la burguesía había obtenido con su aumento inicial. Deberá entonces volver a aumentar los precios de las mercancías que produce, iniciándose de esta manera una tormenta inflacionaria que potencialmente arrasará con el valor del dinero y con la propia reproducción capitalista, en tanto el dinero es premisa de la misma. Esto es lo que se denomina hiperinflación. Pero, acarree o no el proceso inflacionario, efectivamente, ese desastre general de la hiperinflación, las cosas no quedan igual que antes de que dicho proceso se iniciara. El desarrollo entero del proceso inflacionario, sus características y resultados, depende de la lucha entre las distintas fracciones de la burguesía y, fundamentalmente, de la lucha de clases entre la burguesía y los trabajadores. La fracción de la burguesía que aumenta inicialmente los precios -p.ej., un sector de la burguesía industrial-, si cuenta con relaciones de fuerza favorables -monopolización, sindicatos débiles, escasa influencia de los terratenientes- impondrá una nueva estructura de precios relativos en la que el nivel de precios de las mercancías que produce sea superior al nivel de precios de las mercancías que consume para la producción de las mismas: la fuerza de trabajo -deterioro del salario industrial- y, en algunos casos, las materias primas -caída

de los precios agropecuarios.

Las explicaciones monetarista y estructuralista de la inflación señalan aspectos importantes del fenómeno, ahora podemos decirlo, pero estos aspectos deben reinterpretarse. Volvamos entonces a ellas. Las políticas estatales que son interpretadas como inflacionarias (políticas crediticias de estímulo de la demanda, políticas sociales y de desarrollo deficitarias) son efectivamente inflacionarias, pero deben entenderse a partir de la intervención del estado en favor de ciertas fracciones hegemónicas del capital, en un marco de luchas entre clases y fracciones de clase. Estas luchas atraviesan al estado y el accionar del estado deviene así inflacionario. En este punto, la salencia en común de las explicaciones monetarista y estructuralista radica en que ambas presuponen la neutralidad del estado frente a esas disputas en torno del producto social. Las rigideces que los estructuralistas señalan, en la estructura económica de los denominados «países subdesarrollados», como causales en última instancia de la inflación, tampoco operan de manera inflacionaria por sí mismas. Operan como obstáculos para la valorización normal del capital en determinados sectores, ante los cuales las fracciones de la burguesía en cuestión pueden responder de manera inflacionaria o de otra manera (por ejemplo, imponiendo un nuevo esquema tributario). La identificación de los aumentos de salarios por encima de la productividad como causantes de inflación por parte de los monetaristas, finalmente, apunta a la clave de los procesos inflacionarios. Esa clave radica en el antagonismo capital-trabajo. La emergencia de dificultades en el proceso de valorización del capital pueden ser enfrentadas mediante un incremento de la plusvalía relativa (un aumento en la productividad del trabajo). En caso de que ese incremento sea inviable, se recurre al expediente más primitivo del incremento de la plusvalía absoluta (es decir, reducción de salarios). Pero esta reducción de salarios, entendida como reducción de salarios nominales, puede ser resistida por los trabajadores. La inflación se revela aquí como un recurso expropiatorio en manos de la burguesía, un recurso para, mediante aumentos de precios de ciertas mercancías, desvalorizar el dinero y reducir así los salarios reales dejando intactos los nominales. También esta manera de reducir los salarios puede, naturalmente, ser resistida por los trabajadores, pero es a menudo mucho más sencilla que la primera y más efectiva que la segunda a corto plazo. De todos modos, la estabilización de una nueva estructura de precios relativos en desmedro del salario sigue dependiendo del desarrollo ulterior de la lucha de clases.

La importancia de entender los procesos inflacionarios para interpretar el desarrollo del capitalismo argentino de las últimas dos décadas difícilmente pueda ser sobreestimada: la inflación ha sido una de las modalidades privilegiadas de manifestación de la lucha de clases doméstica. Baste señalar esto: el extenso proceso de desestructuración del modelo de acumulación «nacional-desarrollista» vigente desde los años 30 y en crisis desde los grandes enfrentamientos sociales de fines de los 60, se inicia justamente con un fuerte proceso inflacionario hacia

mediados de 1975. El desembarco de la crisis económica mundial en nuestro país, la contracción de las ganancias, la resistencia de sindicatos poderosos a la reducción del salario, operaron en aquella coyuntura de una manera paradigmática. La inflación fue la manera en que esos antagonismos se expresaron y los crímenes de la dictadura la manera en que se resolvieron.⁵

2. El chantaje hiperinflacionario

Las anotaciones precedentes sobre la inflación merecerían profundizarse y precisarse, pero son suficientes para lo que aquí nos ocupa. Quisiera más bien proponer una segunda idea: los procesos hiperinflacionarios que caracterizaron el lapso que va de abril de 1989 a marzo de 1991 explican el inicio y, en parte, la naturaleza de la hegemonía construida alrededor de la convertibilidad y la reestructuración capitalista por la burguesía y expresada políticamente en el menemismo.

Repasemos brevemente aquel período. Hacia mediados de 1988, el plan Austral era reemplazado por el Primavera. El plan Primavera consistía en un acuerdo desindexatorio con los grandes capitales y desdoblamiento del tipo de cambio, en un contexto de bajas reservas y restricción del financiamiento externo, de salarios negociados en paritarias y descrédito creciente del gobierno alfonsinista. Es decir, un postre intento de estabilización encadenado a las decisiones del gran capital.⁶

Para entender el proceso hiperinflacionario que derrumba el plan Primavera e inicia el período menemista es necesario tener presentes al menos cuatro elementos que distinguirán claramente este proceso del ocurrido hacia mediados de 1975:

a) una gran burguesía fortalecida en su capacidad de manejar los precios, debido a su alto grado de monopolización resultante del proceso de concentración y centralización del capital que había tenido lugar desde la década del 70;

b) una gran burguesía capaz de manejar los precios de diversas mercancías, pero especialmente el valor del propio dinero, debido al incremento de sus actividades financieras resultante del proceso de financiarización iniciado con la reforma de la dictadura;⁷

c) una clase trabajadora reactivada a partir de un amplio proceso de luchas contra la política económica alfonsinista, pero signada por la profunda derrota que la dictadura había alcanzado y conducida aún por las tradicionales burocracias sindicales peronistas; y

d) un nuevo desafío para las clases dominantes: la necesidad de reestructurar el capitalismo argentino, una tarea que el alfonsinismo había dejado pendiente y que no parecía en condiciones políticas de encarar. Las super-ganancias que

prometía una eventual privatización de las empresas públicas para la gran burguesía debe ser tenida especialmente en cuenta en este sentido, habida cuenta de que el accionar de la gran burguesía se orienta antes por las super-ganancias esperadas a corto y mediano plazo que en vista de modelos preconcebidos para concretar a largo plazo.

A comienzos de 1989, el Banco Mundial y el FMI ya habían bloqueado el financiamiento externo y las reservas del BCRA eran insuficientes para sostener el tipo de cambio. Y hacia comienzos de Febrero, mediante una corrida especulativa sin precedentes sobre el dólar, los grandes capitales diezmaron las reservas, el BCRA abandonó el mercado de divisas y el tipo de cambio se disparó. A pesar del aumento de la tasa de interés -alcanza el 100% mensual en Abril- los capitales siguieron fugándose hacia el dólar -que había aumentado un 400% en tres meses. La inflación aumentó, consecuentemente, y se inició un acelerado proceso hiperinflacionario: los índices (IPC) trepan de 9,6% en Febrero a 17% en Marzo, 33,4% en Abril, 78,4% en Mayo, 114,5% en Junio y 198,6% en Julio (datos del INDEC, en Informe Económico de Coyuntura del CPCE, varios números)

Hay que detenerse en las dos caras de este proceso. En primer lugar, son evidentes las «finalidades políticas» del proceso hiperinflacionario desatado por el gran capital. La exigencia de avanzar en la reestructuración del estado -en particular en la privatización de las empresas públicas- es planteada por entonces explícitamente, y la hiperinflación viene a asentar las condiciones políticas para realizarla. La bancarrota del alfonsinismo, iniciada con la crisis del Austral y el descrédito manifiesto en la derrota electoral de 1987, impedía al mismo, definitivamente, hacerse cargo de semejante tarea. La gran burguesía era consciente de la situación y sus cuadros políticos comenzaron a operar en consecuencia. El equipo del recientemente elegido Menem, encabezado por el propio Cavallo, anunció que la tasa de cambio estaba demasiado alta y que estaba preparando una nueva reforma financiera. La corrida, finalmente, impone la renuncia a Alfonsín a comienzos de julio.⁸

Sin embargo, la gran burguesía no apuntaba solamente a un cambio de administración, sino a una modificación en las relaciones de fuerza sociales que permitiera imponer las traumáticas medidas inherentes a la reestructuración. Era también Cavallo quien explicitaba la estrategia a seguir en aquella coyuntura: no aceptar ningún cogobierno transicional y dejar que se profundice el proceso hiperinflacionario, para que el gobierno menemista asumiera con un consenso ampliado y pudiera implementar aquellas medidas radicales. Para entender esta estrategia es preciso, en segundo lugar, tener presente la magnitud del impacto del proceso hiperinflacionario entre los trabajadores. Y esto es sencillo: con semejantes índices de inflación, los precios aumentaban a diario, la capacidad adquisitiva de los salarios cobrados se iba reduciendo a lo largo del mes y comenzada la segunda quincena se esfumaba, los despidos aumentaban conforme

avanzaba la incertidumbre.

El salario real retrocedió un 35% de su valor entre abril y julio (cifras del BCRA) y el desempleo y subempleo de Mayo alcanzó el 15%. La desesperación de los trabajadores ante semejante situación tuvo su expresión privilegiada en los asaltos a los supermercados de los cinturones industriales de Rosario y Buenos Aires.⁹

Pero esta era apenas la primera batalla de una guerra inflacionaria que se prolongaría por dos años. La burguesía y los trabajadores respondieron a las primeras políticas de estabilización del nuevo gobierno siguiendo viejos patrones de enfrentamiento. Las tres medidas centrales del plan BB, lanzado en julio de 1989, fueron un acuerdo de precios con las empresas, la fijación de un tipo de cambio único por el BCRA y pautas indicativas para negociar los salarios en las paritarias. El acuerdo de precios fracasó de antemano: las grandes empresas remarcaron durante los días que mediaron entre el lanzamiento del plan y el acuerdo de precios. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo trepó hasta un 50% en los meses siguientes. Y mientras tanto, los aumentos salariales logrados por los trabajadores superaron los índices de inflación del mes precedente en octubre y en noviembre, recuperando parte de la capacidad de compra que habían perdido con la expropiación hiperinflacionaria de abril-julio. Puede decirse que la lucha de clases seguía adoptando modalidades inflacionarias. Una devaluación y la liberación de los precios fue la respuesta del gobierno a esta situación; un nuevo proceso hiperinflacionario, muy semejante al anterior, sería la consecuencia. Los índices de inflación subieron a 40,1% en diciembre, 79,2 en enero, 61,6 en febrero y 95,5 en marzo. Eliminados los controles de cambios y precios, el destino de los sucesivos ajustes conocidos como Erman I a VII no sería muy diferente. Las consecuencias profundamente recesivas de estos ajustes y las medidas de reforma del estado que los acompañaron en adelante fueron resistidas por huelgas y movilizaciones de los trabajadores públicos (judiciales, docentes, más tarde ferroviarios) y hacia comienzos de 1991 una nueva corrida especulativa reiniciaba un proceso hiperinflacionario.¹⁰

Este sumario es suficiente para poner de manifiesto la característica fundamental del período: la lucha de clases seguía desarrollándose alrededor del dinero y adoptando la forma de procesos inflacionarios. Eso que los economistas intentan conceptualizar en jerga psicológica (credibilidad, adaptación, expectativas inflacionarias) seguía siendo más bien el conjunto de reglas, impuesto por la burguesía, que regía el desenvolvimiento del antagonismo entre capital y trabajo y entre distintas fracciones del capital.

Una estabilidad sostenida recién comenzaría en marzo de 1991, con el inicio del plan de convertibilidad de Cavallo, y con ella se estabilizaría una nueva relación de fuerzas sociales gestada en la guerra inflacionaria precedente. El salario real retrocedería desde 1988 (88,7 con 1985 = 100), 1989 (83,7), 1990 (80,9), 1991 (72,1) 1992 (68,3), para más adelante estabilizarse con el desarro-

llo del plan (en base a datos de FIEL en Boletín...Nro.141, Abril de 1995). El plan de convertibilidad establecería nuevas reglas. La madre de esas reglas fue la propia paridad, establecida por ley y respaldada por las reservas del BCRA, entre el peso y el dólar. Los empresarios se comprometieron a no modificar precios, los salarios fueron congelados de jure (en el sector público) o de facto mediante intervención de la burocracia sindical oficialista (en el sector privado).

Un decreto posterior, que autorizaba exclusivamente los aumentos de salarios derivados de aumentos de productividad del trabajo, sintetiza este cambio en las reglas: la lucha de clases no debe expresarse inflacionariamente, sino como disputas alrededor de futuros excedentes por productividad. Para los trabajadores esto significaba la aceptación de sus miserables niveles salariales iniciales a corto y a mediano plazo y, si las cosas marchaban bien, aumentos selectivos a cambio de mayores grados de explotación a largo plazo. Para la burguesía significaba un desafío: aumentar sus ganancias mediante reducción de costos, reorganizando los procesos de trabajo, flexibilizando los contratos laborales, reduciendo los aportes patronales e incorporando medios de producción más modernos en los casos en que fuera rentable. El estado, por supuesto, asistiría a la burguesía en este desafío.

La estabilidad de la moneda sería, desde el inicio del plan de convertibilidad, el sustento de una nueva hegemonía burguesa. Hegemónica es la fracción de clase que impone las reglas en que se desenvuelve la lucha de clases, y la gran burguesía impuso las suyas. Esta hegemonía le permitiría a la misma avanzar profunda y aceleradamente en sus políticas de reestructuración de largo alcance. Detengámonos en este punto.

Entre paréntesis: ¿una nueva hegemonía?

Primero, es evidente que la gran burguesía ha construido una hegemonía -expresada políticamente por el menemismo- que ha sido suficientemente sólida como para garantizar el éxito de su estrategia de reestructuración capitalista. Las luchas sociales desarrolladas durante el gobierno alfonsinista y los dos primeros años del menemista menguaron sensiblemente tras el establecimiento del plan de convertibilidad. Las huelgas y movilizaciones de trabajadores públicos que enfrentaron la reforma del estado (los telefónicos, metalúrgicos de Somisa, docentes y especialmente ferroviarios) fueron enfrentadas por el menemismo sin mayores concesiones y finalmente fracasaron.

El auge siguiente, iniciado a mediados de 1994 y asociado con las luchas del NOA y el Santiagazo, con importantes huelgas puntuales (Sevel, etc.) y con las discusiones en torno a la Asamblea Constituyente y el crecimiento electoral del Frente Grande, auge que pareció condensarse en la Marcha Federal de Julio,

sufrió un reflujo a comienzos de 1995: el denominado «efecto tequila» devolvió a la estabilidad su privilegio y las luchas retrocedieron.¹¹ Estos conflictos desarrollados durante los últimos cuatro años, aislados y desarticulados, en resumen, no frenaron el avance de las principales medidas de reestructuración. Las elecciones realizadas desde 1989 a la fecha fueron cómodamente ganadas por el menemismo. El 46% de los votos obtenidos en 1989 se redujo a 38% en renovación de legisladores y gobernadores de 1991 -realizadas tras seis meses de vigencia del plan de convertibilidad-, alcanzaría un 42% en las legislativas de 1993, y treparía a un 50% en 1995.

Debe recordarse que las campañas electorales del menemismo, en todos los casos, giraron en torno a la estabilidad monetaria ligada con el plan de convertibilidad. Las dificultades que enfrentó en su desarrollo la política económica del gobierno no pusieron en juego esta hegemonía, más bien la misma salió intacta -y acaso fortalecida- de las mismas. La principal de estas difíciles coyunturas fué, indudablemente, la originada en la devaluación mexicana del peso de diciembre de 1994. La Argentina -junto a otros países latinoamericanos- apareció a partir de esta devaluación como riesgosa para los capitales internacionales. A pesar de que las reservas del BCRA eran en un comienzo suficientes para mantener la convertibilidad del peso, el reflujo de los capitales internacionales motivó una pérdida de depósitos bancarios. La magnitud de la crisis fue inédita desde el inicio del plan de convertibilidad: en los primeros cuatro meses de 1995 huyeron del sistema financiero unos 7.600 millones de dólares (sobre un monto total de depósitos de unos 40.000), quebró un banco (el Extrader), otras ocho entidades fueron suspendidas y hasta fines de marzo las acciones en bolsa perdieron un 45%. Sin embargo, el gobierno respondió por la moneda: el BCRA salvó el sistema transfiriendo a los bancos unos 6.000 millones de dólares (reducción de encajes, pasos, préstamos para mantener la liquidez). Para esto se recurrió a un incremento de deuda externa acordando con el FMI y bancos internacionales hacia fines de marzo. Además se decretó la garantía de depósitos, se realizó un ajuste fiscal recesivo (en particular aumento del IVA de 3 puntos) y se lanzó una nueva ley de cheques para multiplicar el crédito y contener la tasa de interés en mayo.

La crisis desencadenada por la devaluación mexicana pondría de manifiesto como nunca antes la fragilidad de la política económica del gobierno; el éxito de su riesgosa operación de salvataje -inédito en nuestra historia reciente- evidenciaría paradójicamente la solidez de la hegemonía expresada por el menemismo. Y ambos componentes se reflejarían, sucesivamente, en las encuestas realizadas en la coyuntura.

Segundo, puede decirse que esta hegemonía, sustentada en la estabilidad monetaria, opera sobre un chantaje. En tanto el proceso hiperinflacionario que la inicia puede entenderse como una auténtica alteración de las relaciones de fuerza sociales, la estabilidad debe entenderse como estabilización de las nue-

vas relaciones de fuerza emergentes. Es sencillo comprender la manera en que la estabilidad monetaria opera sustentando esta hegemonía: los trabajadores no cuentan hoy con una fuerza suficiente como para imponer mejores salarios y condiciones de vida en un marco hiperinflacionario de lucha de clases -y mucho menos para establecer mecanismos sociales efectivos de control antinflacionario de precios. Bajo esta coerción, se ven obligados a resignar salarios y condiciones de vida a cambio del mantenimiento de la estabilidad. Los procesos hiperinflacionarios de 1989-1991 parecen haber grabado un mensaje conservador en la memoria colectiva: en tiempos de retroceso, mejor un sueldo escaso pero seguro en su capacidad de compra, que un sueldo con capacidad de compra incierta. El chantaje de la burguesía también se monta sobre este mensaje de 1989-1991: si se aumentan los salarios, aumentan los precios y volvemos a la hiperinflación.¹²

Sin embargo, para que un chantaje semejante se convierta en una hegemonía política son necesarios ciertos requisitos.

La inflación debe ser presentada como un proceso que responde a unas reglas objetivas de funcionamiento de la economía, por excelencia, al principio monetarista de que los aumentos de salarios por encima de la productividad del trabajo producen inflación. La inflación debe dejar de ser un recurso de la burguesía para incrementar sus ganancias y debe convertirse en fenómeno resultante de leyes económicas quasi-naturales para que el peligro de hiperinflación pueda ser presentado como algo objetivo, y no como una amenaza originada en los propios capitales que el gobierno representa, y para que la política antinflacionaria del gobierno pueda ser presentada como política objetivamente necesaria, y no como expresión de la cristalización de nuevas relaciones de fuerza. Estas trasmutaciones permiten a la burguesía montar, partiendo de un chantaje, su hegemonía alrededor de la convertibilidad. Las medidas más profundas de reestructuración capitalista -la reforma del estado, la desregulación de los mercados internos y la apertura externa, es decir, las medidas que conforman la estrategia de la gran burguesía a largo plazo- son a su vez presentadas como requisitos necesarios para el mantenimiento de la estabilidad -es decir, como lo contrario de lo que son realmente.

Deben extraerse algunos corolarios importantes, aunque más genéricos, del razonamiento precedente. Suele pensarse que las políticas neoconservadoras de restructuración, por las profundas transformaciones que operan en la economía y la sociedad, son precedidas y/o acompañadas de recortes en las libertades democráticas, represión, etc. Sin embargo, esta relación no puede ser planteada mecánicamente. Las políticas de reestructuración son ellas mismas profundas ofensivas contra los trabajadores, pero no necesariamente van de la mano de régimen autoritarios.¹³ La dictadura 1976-1983 no inicia la reestructuración capitalista en la Argentina, sino el menemismo, siete años más tarde. No hay duda acerca de que el disciplinamiento social impuesto por la dictadura es con-

dición necesaria, en última instancia, para el éxito de la reestructuración iniciada por Menem, pero no es condición suficiente. Fueron necesarias también las hiperinflaciones de los años 1989-1991 y la derrota de varias luchas sociales, entre otras cosas. Y la hegemonía menemista, construida a partir de aquella hiperinflación y desarrollada en condiciones democráticas, sin recortes en las libertades públicas ni represión significativa, no puede ser explicada recurriendo sin más al expediente de la dictadura.

Suele entenderse a los estados neoconservadores, por otra parte, como simples instrumentos de opresión de la gran burguesía. Pero si esta idea -teóricamente muy primitiva- no se apoya en un análisis preciso de la reforma neoconservadora del estado, puede conducirnos a un doble equívoco: primero, a suponer implícitamente las bondades del estado preexistente, y segundo, a ignorar los importantes mecanismos de generación de consenso e integración del propio estado neoconservador. Aún el más reaccionario de los estados conservadores aparece como representante del interés general. Su especificidad es que opera, sobre todo, garantizando el valor del dinero, y presentando el interés general como igualdad dineraria.¹⁴

El estado menemista garantiza el valor del dinero de la manera más ortodoxa concebible: mediante convertibilidad por ley de los pesos en dólares, garantizando así la paz social más allá de la guerra inflacionaria.

Finalmente, suele en ocasiones hablarse del pragmatismo y del individualismo como aspectos inherentes a la ideología neoconservadora, sin mayor especificación. Pero esos rasgos ideológicos del neoconservadurismo derivan precisamente de sus políticas dinerarias. El neoconservadurismo presenta la política económica como mera política monetaria y la política monetaria como una no-política -una administración contable de relaciones debe-haber antes que una política que violenta relaciones sociales- y, en consecuencia, como la única no-política posible. Este pragmatismo es precisamente el rasgo ideológico del menemismo que fué bautizado localmente como posibilismo. Pero este pragmatismo debe combinarse con otro recurso. A aquella no-política objetivamente necesaria debe agregársele una meta, porque debido a su propia naturaleza carece de finalidad alguna. El menemismo diseñó esta meta ideológica para su no-política: el ingreso al primer mundo.¹⁵ La ideología individualista del neoconservadurismo, por su parte, remite a que éste promueve una nueva ciudadanía: la igualdad de los ciudadanos ante la ley encarna ahora en la igualdad de los agentes del mercado ante el dinero. Ante el dinero, no existen clases ni solidaridades, sino individuos con sus egoismos particulares. Para decirlo en términos de W.Bonefeld, se trata de «la descomposición de las relaciones de clase a través de la subordinación de la clase obrera a la igualdad abstracta del dinero». Estos aspectos de la política, el estado y la ideología del neoconservadorismo, presentes en el caso del menemismo, deben ser estudiados y tenidos en cuenta para entender su hegemonía.

3. El chantaje-crediticio

El chantaje hiperinflacionario es el principal sustento de la hegemonía burguesa expresada en el menemismo. Empero, durante la vigencia de la convertibilidad se sientan las bases para una forma conexa de chantaje. La tercera idea que quisiera proponer es que el chantaje hiperinflacionario fué reforzado por un chantaje crediticio, emergente del mismo, que garantizó una consolidación de esta hegemonía.

El plan de convertibilidad redujo la inflación hasta índices sin precedentes desde hace décadas. La inflación de partida de 1990 había alcanzado 1343% y se reduce a 84,1 en 1991, 17,5 en 1992, 7,4 en 1993, 3,9 en 1994 y para 1995 se proyecta un índice del 4,7% (cifras de Carta Económica, con proyecciones optimistas del Estudio Broda). La estabilidad impulsó un proceso de endeudamiento masivo de la población, destinado a la adquisición de bienes de consumo e inmuebles a crédito. El consumo doméstico tuvo así un crecimiento real de 38,3% entre 1990 y 1994 (incluido el consumo público). Es importante advertir, sin embargo, que este endeudamiento no resulta explicable a partir de que el crédito fuera barato (pues los intereses en dólares son altísimos, convirtiendo a los comerciantes en una suerte de usureros), sino a partir de la propia estabilidad. Después de años de altas tasas de inflación, en que las compras a crédito no existían o eran sumamente riesgosas, la estabilidad por sí misma impulsó el rezagado consumo, a crédito directo o por intermedio de las líneas de préstamos bancarias que proliferaron al efecto. Y la misma estabilidad señala sus límites. En ciertos sectores de la población, endeudados en dólares, el mantenimiento de la convertibilidad se convirtió poco a poco en una cuestión de vida o muerte, generándose una nueva forma de chantaje crediticio que refuerza el hiperinflacionario -y una nueva ideología consumista que refuerza el individualismo antes mencionado.

Una aureola de prosperidad rodeó a la convertibilidad a partir de este incremento del consumo, pero para comprender este fenómeno es necesario referirse a otras variables. Por un lado, el lanzamiento del plan de convertibilidad congeló precios internos elevados en dólares respecto de los precios internacionales, y por otro, las medidas de apertura externa del gobierno eliminaron trabas a la importación. Entonces, las importaciones de bienes de consumo aumentaron y volvió a generarse una situación semejante a aquella de la «plata dulce» de Martínez de Hoz. Las importaciones crecieron un 102,9% en 1991, 79,7% en 1992, 12,8 en 1993 y 28,4 en 1994 (estos índices incluyen bienes de capital: más adelante me referiré a éstos). El gobierno adopta entonces medidas que tienden a recuperar la competitividad perdida (supresión de aranceles a la importación de bienes de capital, reintegros de impuestos indirectos para los exportadores, reducción de aportes patronales, régimen automotriz), para reequilibrar una balanza comercial sumamente deficitaria. Estas medidas -aunque las exportacio-

nes aumentaron- no equilibraron la balanza comercial (el déficit alcanzó 5.800 millones en 1994), pero impulsaron una reactivación de la producción que contribuyó a consolidar las apariencias de prosperidad. El decrecimiento real de la inversión bruta interna de 1990 se recuperó ya en 1991 (25,1%), gracias a la estabilización de la economía, pero la inversión siguió creciendo con tasas de 30,9% en 1992, 13,7 en 1993 y 18,2 en 1994. El crecimiento real acumulado del PBI entre 1990 y 1994 fue del 34,4%, a una media de 7,6% anual desde el inicio de la convertibilidad. Si sumamos a esto una afluencia de capitales extranjeros de corto plazo que parecía inagotable -motivada en las bajas tasas de interés internacionales- resultaba aparentemente convincente el discurso oficial: aunque había problemas, la economía estaba marchando hacia la prosperidad. Esta situación se asemeja a otras que tuvieron lugar bajo los regímenes neoconservadores. Hacia 1983 se incrementó la afluencia de capitales -y con ellos de mercancías- a los EEUU de Reagan, aumentando el consumo a crédito de bienes lujosos, montando una prosperidad ficticia pero generadora de consenso alrededor de la reaganomics, y desembocando en una recesión y el colapso financiero de octubre de 1987. En nuestro caso, naturalmente, la apariencia de prosperidad fue mucho más débil y pasajera: el fenómeno determinante respecto del problema de la hegemonía radicó en la sujeción de amplios sectores de la sociedad, por endeudamiento, al mantenimiento de la convertibilidad.

Es importante, sin embargo, advertir las dimensiones de este proceso de endeudamiento. La venta en cuotas no incluyó solamente pisos de lujo y autos importados, sino también los electrodomésticos y las camisas financiadas en 6 a 12 cuotas mensuales. Las tarjetas de crédito circulantes suman entre 6 y 8 millones y cargan una deuda global de unos 900 millones de pesos, mientras sus titulares tienen un promedio de 1000 pesos de sueldo (Página 12, 21/5/95). Estos hechos dan una idea de la extensión que puede haber alcanzado el chantaje crediticio durante los últimos años.

4. Alcance y limitaciones de los chantajes menemistas.

Exploramos los mecanismos que sustentan la hegemonía alcanzada por la burguesía alrededor de la convertibilidad y de sus políticas de reestructuración capitalista. Hace falta ahora preguntarse por el alcance y las limitaciones de los mismos. En particular, la cuestión de las limitaciones, las fisuras, las contradicciones de esta hegemonía es ineludible para los socialistas: señala el camino en que la lucha social debería encaminarse. Pero es también, en las circunstancias actuales, la más compleja. En este sentido quisiera proponer una cuarta idea: **el límite de esta hegemonía burguesa radica, básicamente, en la tendencia de la reestructuración a generar un desempleo y una marginalidad crecientes.** Esta limitación es inherente, en última instancia, a la propia naturaleza de una

hegemonía sustentada sobre el dinero. Pero debemos antes precisar algunas cuestiones.

Toda hegemonía política descansa sobre sectores, clases o fracciones de clase determinadas de una sociedad, y nunca sobre una indeterminada ciudadanía. Es necesario analizar en primer lugar, entonces, sobre quiénes se apoya la hegemonía menemista. La burguesía se encuentra unificada detrás de la convertibilidad y la reestructuración capitalista. La gran burguesía, es decir, el puñado de los denominados «grandes grupos económicos» con actividades diversificadas a través de la producción industrial y agropecuaria y las finanzas que domina más de la mitad del PBI local, es el sujeto de esta hegemonía. Las fracciones subordinadas de la burguesía, agropecuarias e industriales, debilitadas por un proceso de concentración intensa del capital iniciado hace veinte años, carecen de un proyecto alternativo y de la fuerza necesaria para imponerlo, andando a la zaga de la gran burguesía. Sus reivindicaciones particulares (protestas de las PYMES por el costo del crédito o de la FAA por los precios agropecuarios) nunca apuntan, consecuentemente, a la constitución a largo plazo de una alianza alternativa. El plan de convertibilidad y las medidas de reestructuración gozan de unánime consenso en la burguesía y son considerados como presupuestos en las discusiones sobre el rumbo a seguir. Las diferencias se ven entonces reducidas a matices relacionados, en el mejor de los casos, a ajustes para el futuro (aumentar la productividad mediante caída de los costos, deflacionar mediante cierta recesión, devaluar un poco el peso, etc.).¹⁶ Este consenso se manifestó en los meses recientes en dos oportunidades. Cuando la corrida generada por la devaluación mexicana, la burguesía demostró que su única condición para continuar respaldando la política menemista radica en que los organismos financieros internacionales la respalden a su vez -en caso contrario, obviamente, la actitud de la burguesía local sería suicida. En la coyuntura pre-electoral, las fluctuaciones de la bolsa al compás de las encuestas demostraron que la burguesía no sólo exige la continuidad de la política menemista, sino también la continuidad del propio menemismo.

La pequeño-burguesía, los profesionales, comerciantes y trabajadores de cuello blanco tradicionalmente identificados como clases medias, guardan una relación más compleja con el plan de convertibilidad y las políticas de reestructuración. Los sectores más acomodados de la pequeño-burguesía, a causa del auge del consumo de los años precedentes, parecen apoyar al menemismo. En los barrios más ricos de la Capital Federal, por ejemplo, el menemismo se impuso y obtuvo porcentajes de votos superiores a la media capitalina en las elecciones de Mayo. Sin embargo, los mayoritarios sectores medios de la pequeño-burguesía rechazan el menemismo. La lucha de los mismos por el derecho a la educación, que alcanzó antes de las elecciones importantes niveles como en la ocupación de facultades y en la marcha contra los proyectos de educación superior de fines de Abril, ponen de manifiesto este rechazo. Los distritos en que predominan estos

sectores medios vienen manifestándose a lo largo de los últimos años como baluartes de la oposición, votando sucesivamente por la UCR, el Frente Grande y el Frepaso. En las recientes elecciones, el triunfo del Frepaso en Capital Federal (en particular, en los barrios representativos del sector medio), así como los importantes porcentajes obtenidos en barrios medios del conurbano y otras grandes ciudades del interior por el propio Frepaso o la UCR y el triunfo radical en los municipios de la costa, incluida Mar del Plata, expresaron electoralmente este rechazo.¹⁶ Sin embargo, la naturaleza de este anti-menemismo debe precisarse mejor en este contexto, porque nos interesa el problema de la conformación de una nueva hegemonía burguesa más que simples resultados electorales obtenidos por partidos que disputan por constituirse en la expresión política de esta hegemonía.

En este sentido, debe advertirse que esos sectores medios no parecen rechazar mayoritariamente la propia convertibilidad y las medidas de reestructuración capitalista, sino la manera en que el menemismo las implementa y -acaso- algunas de sus consecuencias. Ese 29% de los votantes que se inclinaron por el Frepaso en Mayo está conformado por una parte minoritaria de los sectores medios que rechaza la convertibilidad y las medidas de reestructuración y que no encontró en el cuarto oscuro alternativas mejores, pero también por una porción mayoritaria de esos sectores que acepta la convertibilidad y las políticas de reestructuración, aunque prefiriendo las modalidades más prolifas de implementación de las mismas que prometiera el Frepaso. El 17% de los votantes que optaron por la UCR puede analizarse de manera análoga, pero en este caso el primer componente fué indudablemente menor: a pesar de que la confusa propuesta del radicalismo fué más anti-menemista que la del Frepaso, la herencia del pacto de Olivos impidió que capitalizara el voto anti-menemista. Puede concluirse, entonces, que los sectores medios de la sociedad no resultan ser un punto de apoyo del menemismo en el terreno político, aunque tampoco son, mayoritariamente, sectores que escapen a la hegemonía construida por la burguesía alrededor de sus políticas de convertibilidad y reestructuración.

Los trabajadores constituyeron, de manera creciente desde 1991 hasta hoy, una apoyatura de masas para el menemismo, aún cuando éste representa la expresión política más acabada de la hegemonía burguesa. Las luchas libradas desde el inicio del plan de convertibilidad hasta nuestros días, a través de sus auges y reflujos, su dispersión y sus tendencias hacia la unificación, sus demandas económicas, en ocasiones políticas, y sus resultados puntuales, nunca cristalizaron políticamente fuera de los márgenes del menemismo ni, por ende, pusieron en peligro la hegemonía. Es evidente que las elecciones de Mayo confirmaron con creces esta afirmación. Mientras que Menem obtuvo cerca de un 50% de los votos a nivel nacional, este porcentaje aumenta en todas las regiones predominantemente obreras: un 57% en el conurbano bonaerense, que sube a más del 60% en La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Alte. Brown, E.Echeverría,

F. Varela y Merlo, por ejemplo. Las provincias en que se registraron grandes conflictos sociales registran resultados que también superan la media nacional: un 64% en Santiago del Estero, un 61% en Tierra del Fuego, un 54% en Salta y un 50% en Jujuy. En las zonas de mayor desempleo, finalmente, el menemismo obtuvo excelentes resultados: en Bahía Blanca (ciudad de la Provincia de Buenos Aires con mayor desempleo, un 25% de desocupados), Menem mantuvo su 50% y en San Nicolás (convertida en pueblo fantasma desde los despidos de Somisa) ganó con un 42%. Estos resultados adquieren mayor relevancia si consideramos que hubo corte de boletas favorable a Menem en el primer caso - porque fué elegido un intendente radical para B. Blanca con el 60% de los votos- y los trabajadores repudiaron a Menem durante su visita proselitista a Somisa - ver Clarín del 24/4/95- respecto del segundo.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta otra dimensión de los resultados electorales, una dimensión sistemáticamente escamoteada por el gobierno y la prensa: el abstencionismo y votoblanquismo, que comienzan a incrementarse en 1991 - en la primera elección con Menem en la presidencia- y constituye un fenómeno de masas en la actualidad.¹⁸ En las parlamentarias de 1993, un 11% del padrón electoral que se había negado a asistir a las mesas de votación se constituía como tercera fuerza a nivel nacional tras el PJ y la UCR. En las últimas elecciones un 9,2% del padrón se negaría nuevamente a votar, ubicándose como tercera fuerza a pocos puntos de la UCR. La importancia de este fenómeno no debe menospreciarse porque ese rechazo a las elecciones es altísimo comparado con los precedentes y porque parece concentrarse especialmente en zonas populares del Gran Buenos Aires y Santa Fé.

Varios comentaristas (como R. Bacman en Clarín del 17/5, C. Floriá en La Nación del 16/5, M. Giardinelli en Página 12 del 15/5, etc.) y algunos políticos (Alfonsín entre ellos) interpretaron este respaldo masivo a Menem como emergencia de un voto conservador. Los trabajadores habrían preferido conservar la estabilidad antes que resolver los problemas democráticos (las violaciones de la dictadura a los DDHH, actualizadas desde las confesiones de los «arrepentidos», la supresión de la independencia de poderes, la corrupción reinante con el menemismo) o aún problemas sociales (como la regresiva distribución de la riqueza o el desempleo).

Este carácter conservador del voto a Menem es innegable, por cierto, pero a su vez debe explicarse por el chantaje hiperinflacionario realizado contra los trabajadores. Habida cuenta del contenido de ese chantaje -que vimos previamente- la afirmación de que «se votó con el bolsillo» antes que con «los principios» tiene menos de explicación que de insulto a los trabajadores.

De los párrafos precedentes se desprende que la hegemonía menemista, que tiene por protagonista a la gran burguesía, se apoya masivamente sobre los trabajadores.¹⁹ En este sentido, es pertinente hablar de una alianza entre ricos y pobres en torno del plan de convertibilidad y de la reestructuración capitalista.

Esta nueva alianza, aún sin especular acerca de su porvenir, constituye ya un fenómeno sin precedentes desde la alianza forjada por el peronismo de mediados de la década de 1940 en torno del modelo de acumulación capitalista que predominara hasta 1975. Pero debemos preguntarnos ahora por su porvenir: ¿dónde radicarían las limitaciones de esta nueva hegemonía?

Si esta hegemonía se sustenta, efectivamente, sobre el chantaje hiperinflacionario iniciado en 1989, sus límites deben buscarse en los límites de este chantaje. El aumento del desempleo y la exclusión social sería la primera y más inmediata de estas limitaciones. Los índices de desempleo, que ya habían alcanzado una media superior a la histórica hacia fines del gobierno alfonsinista, permanecen estables durante los primeros años del plan de convertibilidad (6,5% de la PEA en 1991, 7% en 1992) para comenzar a crecer desde entonces (9,6% en 1993, 11,5% en 1994, 12,2% en 1994 -y en la proyección más optimista 14% para 1995, según cifras de Carta Económica, aunque subestiman el fenómeno). Sumando a los subempleados, tendríamos actualmente un 20% de la PEA (unas 2.300.000 personas) marginado del mercado de trabajo (y otras 2.000.000 de personas más bajo contratos precarios y subpagadas). Este desempleo masivo y la marginalidad que genera tienen consecuencias antagónicas: presiona sobre el salario y las condiciones laborales de la porción empleada de la fuerza de trabajo, por una parte, y atenta contra el chantaje hiperinflacionario vigente, por otra. La primera, una consecuencia clásica del desempleo, es comprensible de suyo; la segunda requiere una breve aclaración. Es evidente que el chantaje hiperinflacionario amenaza a todos aquellos trabajadores que temen las repentinas expropiaciones de sus salarios operadas por la inflación, es decir, aquellos que efectivamente tienen un empleo. Pero esta amenaza parecería menos efectiva para todos aquellos que carecen de empleo o cuentan con empleos periódicamente amenazados. El desempleo es una variable independiente en este contexto. El chantaje hiperinflacionario -y naturalmente, el crediticio- cuentan con una limitación inmediata: son mecanismos de dominación de los que tienen algo por perder, de los asalariados con puestos de trabajo estables. Los que nada tienen por perder, los desocupados y las crecientes masas de asalariados cuyos puestos de trabajo son cada vez más precarios e inestables, tienden a quedar fuera del chantaje.

5. Trabajar menos para trabajar todos.

El desenvolvimiento de la economía durante los últimos años y, especialmente, sus tendencias actuales dejan pocas esperanzas para una recuperación de los niveles históricos de empleo de la Argentina. Los altos índices de inversión y de crecimiento del PBI registrados durante los primeros años del plan de convertibilidad, que generaron la apariencia de prosperidad antes mencionada,

abrieron paso al optimismo del gobierno y de varios economistas. El menemismo proclamaba un incremento permanente del PBI del 6% anual hasta el año 2000: ante semejantes perspectivas, el problema de un desempleo que comenzaba a incrementarse parecía reversible a corto plazo.²⁰

Pero ya por entonces ese optimismo era exagerado. Se partía de niveles previos de inversión y crecimiento negativos, la importación de bienes de capital correspondía principalmente a equipo de oficina, telefonía y medios de transporte antes que a nueva maquinaria y estas importaciones dependían de la afluencia de crédito externo antes que del ahorro interno. Nada garantizaba, por ende, el comienzo de un nuevo ciclo de acumulación.²¹ Desde el inicio de la crisis desencadenada por la devaluación mexicana aquellas ilusiones se desbarrancaron definitivamente. Las proyecciones más optimistas para 1995 indican un 0% de crecimiento para la inversión y un 1% para el PBI. La caída de las importaciones de -7,2% y aumento de las exportaciones del 2,1 previstos, revierten el signo que tenían antes ambas variables, imponiendo un sesgo exportador basado en la retracción del consumo interno. Las ramas de la industria que satisfacen el consumo interno, y que guiaron el incremento del PBI industrial durante estos años, comenzaron ya a retroceder: en el primer trimestre de 1995, respecto de igual período de 1994, la producción de artefactos para el hogar, heladeras, aire acondicionados y lavarropas cayó un -10%, la de cocinas, calefones y termostanques un -17,8% y la de automotores creció un 2,2%, muy por debajo de los índices de 1991-1994. El crecimiento global del PBI industrial del 2,7% registrado entre ambos trimestres responde a las ramas de exportación al Mercosur (siderurgia, aluminio, plásticos petroquímicos y alimentos (datos FIEL, Clarín Económico del 23/4/95). Este retroceso del consumo interno debilitará en buena medida uno de los sustentos de la hegemonía menemista: el chantaje crediticio. Sin embargo, nos concentraremos en el chantaje hiperinflacionario y el desempleo. Las altas tasas de interés del mercado norteamericano -una respuesta a tasas alemanas y japonesas igualmente altas- compromete ahora el futuro de la afluencia de capitales, mientras que la deuda externa pública alcanzaría ya unos u\$s 85.000 millones y la privada unos u\$s 20.000 millones (cálculos de Frigerio en Clarín, 2/5/95). En realidad, la sobredeterminación de la economía argentina por una economía mundial extremadamente globalizada y en recesión, con crecientes masas de capital ficticio que no pueden ser invertidas de manera rentable en la producción y siguen fluyendo especulativamente hacia los mercados financieros más rentables, sigue atentando contra estas frágiles recuperaciones domésticas de la inversión y el crecimiento.²² El inminente comienzo de un nuevo período de estancamiento parece indicar, entonces, que el desempleo seguirá incrementándose.

¿Qué perspectivas tenemos y qué estrategias deberíamos adoptar los socialistas revolucionarios ante esta situación? ¿Qué hacer para comenzar a enfrentar con éxito la hegemonía menemista? Las tentaciones centroizquierdistas de eri-

gir una oposición al menemismo sobre los sectores medios y alrededor de cuestiones democráticas parecen carecer de futuro, debido a la incapacidad reiteradamente manifiesta de estos sectores de reivindicar alternativas que no sean sino variantes más prolijas de las propias políticas menemistas; y sobre todo, profundizan la grave escisión social entre estos sectores medios y el conjunto de los trabajadores -a quienes no ofrecen alternativa alguna- consolidando así por omisión la hegemonía menemista. Un curioso e impotente «neo-gorilismo» vendría a ser el destino ideológico de semejante empresa. La mera denuncia izquierdista del plan de convertibilidad y de las medidas de reestructuración del menemismo, por otro lado, caerá en saco roto mientras siga pesando en los trabajadores el chantaje hiperinflacionario, porque dicha denuncia -aún cuando fuera escuchada, y no es el caso- no podría evitar que dicho chantaje siguiera operando.

Es necesaria, en cambio, una estrategia que tienda a rearticular socialmente y devolver su fuerza política a la clase trabajadora. Una estrategia que apunte a reconstruir, entre los trabajadores, la solidaridad y la confianza en sí mismos. Y el núcleo de esta estrategia es la lucha contra el desempleo. El problema de un desempleo que se estructuraliza con altos índices tiende a escapar a la hegemonía menemista, como señalamos y como quedó de manifiesto en su usufructo en las recientes promesas electorales de Massaccesi, de Bordón y aún de Menem, y a marginalizar grandes masas de población.

Estas masas crecientes de desempleados marginalizados serán incapaces de desenvolver una resistencia independiente del resto de los trabajadores, pues no cuentan con tradiciones organizativas que puedan desarrollarse fuera de los lugares de trabajo, como los campesinos indígenas chiapanecos, los coqueros bolivianos, etc. La respuesta del menemismo a este proceso de marginalización será una intensificación de las políticas asistencialistas ya implementadas por Duhalde en la Provincia de Buenos Aires (cajas de alimentos, terrenos, creación de subempleos y demás políticas que garantizan la adhesión manifiesta en las elecciones bonaerenses) y otros caudillos locales en nuestros días.²³ El objetivo de estas políticas asistenciales es contener la explosividad propia de situaciones de extrema pobreza y sus limitaciones son meramente presupuestarias. La respuesta de los trabajadores, en cambio, tiene como objetivo su rearticulación social y consiste en luchar por el pleno empleo con reducción de la jornada laboral. La solidaridad del trabajo con las distintas formas de no-trabajo es condición necesaria para recuperar la fuerza política de los trabajadores.

Un extenso proceso de luchas alrededor del pleno empleo con reducción de la jornada de trabajo viene desarrollándose desde comienzos de la crisis mundial en los países europeos, en EEUU, etc.²⁴ Aunque la tradición local de lucha contra el desempleo es menor -quizás debido a los elevados índices de ocupación que caracterizaron al mercado de trabajo argentino durante décadas-, reivindicaciones en este sentido empezaron a ser planteadas en luchas recientes: en las asambleas del paro/ocupación de La Continental de Usuhaia, en los paros de

docentes y estatales del interior -donde los atrasos en los pagos de sueldos son, en realidad, el preludio del ajuste con reducción de personal que se avecina-, en las protestas de la CGT-San Lorenzo ante la situación alarmante del Gran Rosario. Sin embargo, el carácter socialmente rearticulador y políticamente dinámico de la lucha alrededor del pleno empleo con reducción de la jornada de trabajo podría desenvolverse plenamente si estos conflictos aislados se generalizaran y expresaran sus reivindicaciones en un programa único. Un programa que:

1. reconstruyera la solidaridad entre los trabajadores, especialmente sumando a la lucha a las mujeres trabajadoras, a los trabajadores inmigrantes y demás sectores de la clase cada vez más masivos aunque tradicionalmente marginados por las burocracias sindicales;
2. tendiera a conformar una alianza social encabezada por los trabajadores, con sectores marginalizados, sectores empobrecidos de la pequeño-burguesía y demás víctimas de la reestructuración capitalista;
3. integrara inmediatamente la dimensión internacional que adquieren los problemas del trabajo con la globalización del capitalismo, en particular respecto del Mercosur, donde las diferencias nacionales entre trabajadores serán manipuladas en contra del conjunto de los mismos;
4. incorporara paulatinamente otras reivindicaciones ligadas con el trabajo: salarios, condiciones de trabajo, educación y capacitación, contratos, jubilaciones, salud, y aún cuestiones de organización del proceso de trabajo, uso de nuevas tecnologías, gestión de las empresas, preservación del medio ambiente, etc.

Se trataría de un programa por reformas, indudablemente, pero por reformas que rearticulieran a la clase trabajadora con independencia respecto de la burguesía y de su estado y le devolverían su fuerza para luchas futuras. En el marco de crisis actual, por lo demás, la reducción de la jornada de trabajo es una de esas reformas revolucionarias que marcan el camino hacia el socialismo. La esperanza, como quería Benjamin, seguimos debiéndola a aquellos sin esperanza.

Bs.As., Mayo de 1995.

dialéktica

Secretaría General C.E.F.y L. • Revista de Filosofía y Teoría Social

NOTAS.

¹ Un botón de muestra: véase en el suplemento económico de Clarín inmediatamente anterior a las elecciones (7/5/95) el reportaje a H.Liendo (PJ), R.Terragno (UCR) e I.Chojo Ortiz (FREPASO), reportaje que lleva por título «Nadie se opone a la convertibilidad».

² Ver los balances de las elecciones realizados por la izquierda, desde los lamentos por la polarización y la falta de recursos de A.Borón de la Alianza Sur (en Página 12 15/5) hasta las acusaciones mutuas de los grupos trotskystas (en Semanario Socialista del 17/5, Solidaridad Socialista del 18/5, Prensa Obrera del 16/5, etc.).

³ Esta aparente emergencia de una nueva hegemonía de largo alcance resulta, sin embargo, patente para algunos observadores extranjeros. J.Adelman, por ejemplo: «desde mediados de los 50 hasta fines de los 80, el capitalismo argentino osciló entre un modelo que no acababa de morir y un modelo que se negaba a nacer. En consecuencia, los estatistas fueron continuamente tentados de reformar el modelo populista desde adentro (Frondizi, Illia, Perón y Alfonsín) o forzar su extinción desde afuera (Aramburu, Onganía y Videla). Nada de esto sucedió. En cambio el desarrollo de desindustrialización y el endeudamiento externo, procesos que se aceleraron en el curso de la última dictadura, crearon nuevos socios para una alianza mientras debilitaban a otros. Pero es a través del trauma de los últimos años del gobierno de Alfonsín y los primeros de Menem que la constelación de una nueva alianza emergió» y agrega que «lo que parece más paradójico es que sea el peronismo, tal como fue aggiornado por Carlos Menem, el autor del desmantelamiento del populismo» J.Adelman: Post- Populist Argentina, en «New Left Review», Nro. 203, Enero- Febrero 1994, p.89-90.

⁴ El debate entre monetaristas y estructuralistas es ya tradicional en Argentina. Véase, por ejemplo, A.Alsogaray: Moneda, inflación y estatismo, en F.Pinedo: «La Argentina, su posición y rango en el mundo», Bs.As., Sudamericana, 1971, y A.Ferrer: Crisis y alternativas de la política económica argentina, Bs.As., FCE, 1977.

⁵ Guido Di Tella, funcionario de aquel -y del actual- gobierno peronista, reconoció claramente este papel de la lucha de clases en el proceso inflacionario de 1975 (ver Perón-Perón 1973-1976, Bs.As., Hyspamérica, 1986, en particular capítulo VII).

⁶ Aquí paso por alto ciertos hechos y resumo en exceso otros. Para una crónica más detallada, véase A.Bonnet y E.Glavich: El huevo y la serpiente. Notas acerca de la crisis del régimen democrático de dominación y la reestructuración capitalista en Argentina, 1983-1993, en «Cuadernos del Sur», Nros.16 y 17.

⁷ Para una comprensión de las relaciones entre capital monopolizado, recesión económica y procesos inflacionarios originados en la esfera financiera ver P.Sweezy y H.Magdoff: Production and finance y otros artículos de «Monthly Review» de los años 80 en «Stagnation and the financial explosion», N.York, Monthly Review, 1987.

⁸ Es sumamente interesante ver la manera en que uno de los propios funcionarios de Alfonsín asimila la experiencia. Ver J.L.Machinea: *Stabilization under Alfonsin's government: a frustrated attempt*, Bs.As., Cedes, 1990, especialmente IV.

⁹ Un análisis de los asaltos a los supermercados, ver N. Iñigo Carrera... *Crítica de nuestro tiempo*.

¹⁰ El enfrentamiento directo entre trabajo y capital bajo modalidades tradicionales (grandes huelgas, movilizaciones y ocupación de lugares de trabajo) y el triunfo de un capital que no parece dispuesto a negociar parece presidir en todos los casos las políticas de reestructuración capitalista -en particular, la reforma del estado. El caso paradigmático es el de la huelga minera contra Thatcher, el más reciente el de los petroleros contra Cardoso. En nuestro caso, quizás este fenómeno haya sido distorsionado en parte por el peso de las burocracias sindicales sobre el movimiento obrero.

¹¹ Para esta coyuntura, ver E.Lucita: *Por ahora sin alternativas*, en «Inprecor para América Latina», Nro.47, Abril-Mayo de 1995.

¹² Estas ideas alrededor de la relación entre dinero, lucha de clases y políticas de los estados neoconservadores -es decir, el núcleo conceptual de este artículo- provienen de W.Bonefeld: *Dinero y libertad, el poder constitutivo del trabajo y la reproducción capitalista*; W.Bonefeld y J.Holloway: *Dinero y lucha de clases*; W.Bonefeld: *Money, equality and exploitation: an interpretation of Marx's treatment of money* y otros artículos de los autores que proximamente publicará «Cuadernos del Sur».

¹³ El problema del «establecimiento pacífico» del neoliberalismo fué planteado por P.Anderson en su reciente conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (28/9/94).

¹⁴ Ver J.Holloway: *Se abre el abismo. Surgimiento y caída del keynesianismo*, en «Marxismo, estado y capital», Bs.As., Tierra del Fuego, 1994.

¹⁵ No parece tratarse ya de una ideología en sentido tradicional -una representación mistificada de la realidad- sino de una especie de sustitución de la realidad por una mistificación (ver T.Negri: *Fin de siglo*, Barcelona, Paidós, 1992, capítulo VII).

¹⁶ Un buen esquema de las posiciones existentes entre los economistas burgueses en torno a la política económica del gobierno puede encontrarse en P.Gerchunoff y J.L.Machinea: *Un ensayo sobre la política económica después de la estabilización*, en P.Bustos (compilador): «Más allá de la estabilidad. Argentina en la época de la globalización y la regionalización», Bs.As., Fundación F.Ebert, 1995.

¹⁷ Menem superó su media capitalina (41,52%) en Barrio Norte (45,45%), Recoleta/Retiro (57,44%), Palermo (44,21%), Belgrano/Núñez (42,62%). Bordón, a su vez, superó su media (44,2%) en los barrios típicos de clase media como Flores/ Floresta (48,96%), P.Avellaneda/V.Sarsfield/V.Luro (46,83%), P.Chacabuco (48,94%), Almagro (45,55%),

La Paternal/Agronomía (48,18%), V.Devoto (47,72%) y V.del Parque (47,71%) (Clarín, 16/5). Sólo parecen haberse registrado votaciones obreras al Frepaso, por lo demás, en algunos sectores del cinturón del Gran Rosario.

¹⁸ La metodología seguida para estimar esta negativa al voto surge de calcular un no voto relativo sumando los votos en blanco y el ausentismo relativo. Este, por su parte, se calcula restando del ausentismo absoluto un ausentismo estructural derivado de errores en los padrones, enfermos, trasladados, pérdida de documentos y otras razones. Expresa entonces el número de votantes que decidieron rechazar su obligación de votar (metodología de A.López: No votarás. Ausentismo y voto en blanco tras una década de democracia, Cuaderno Nro.24 de IDEP/ATE, 1993). En la elección de Mayo hubo un 672.030 votos en blanco (según Clarín, 21/5) y, si ¹proyectamos la relación ausentismo relativo/absoluto del 32,42% de las elecciones de 1993, hubo 1.367.456 personas que no quisieron ir a votar (a partir La Nación, 16/5). La suma arrojaría un no voto relativo de 2.039.977, 9,2% del padrón electoral. Esto es, la cuarta fuerza después del PJ (8.311.908), el Frepaso (4.878.696) y la UCR (2.851.618). Las disposiciones de la nueva constitución, los intereses del gobierno y la complicidad de gran parte del periodismo hicieron que este fenómeno pasara inadvertido.

¹⁹ Una encuesta reciente del CEOP (Clarín 21/5) confirma nuestra interpretación de los resultados electorales. Las principales razones del voto fueron «el plan económico y la estabilidad» en el caso de Menem, «es la única alternativa» en el caso de Bordón y «siempre fui radical» en el caso de Massaccesi. Por otro lado, los votantes de Menem lo habían votado ya en un 77% de los casos, habían votado a la UCR en un 4,1% y al FG en un 2,6%. Los de Bordón habían votado al Frente Grande en un 39,2%, a la UCR en un 27,1% y al PJ en un 10,7%. Los de Massaccesi habían votado a la UCR en un 82,2%, al PJ en un 3,5% y al Frente Grande en un 1,9%.

²⁰ Es necesario precisar que, aún en caso de una moderada recuperación de la actividad económica, los altos índices de desempleo no retrocederían automáticamente, porque las ramas que comandaron el crecimiento del PBI industrial durante los años recientes no tienden a absorber cantidades considerables de mano de obra. Véase L.A.Beccaria: Reestructuración, empleo y salarios en la Argentina, en B.Kosacoff: «El desafío de la competitividad», Bs.As., CEPAL-Alianza, 1993, y L.Beccaria y N.López: Reversión productiva y empleo en Argentina, en P.Bustos (compilador): «Más allá de la estabilidad», op.cit.

²¹ Ver análisis del documento oficial «Argentina en crecimiento 1993-1995» (de mayo de 1993) de R.Astarita: Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista, en «Cuadernos del Sur» Nro.16, Octubre de 1993. Para un análisis detallado del desarrollo de la política económica del menemismo ver A.Mayo: Plan Cavallo: reestructuración capitalista y coyuntura, en «Cuadernos del Sur» Nro.18, Diciembre de 1994.

²² El problema del desempleo tiene idéntica extensión a la crisis mundial del capitalismo: la desocupación alcanza a 820 millones de personas, es decir, un 30% de la fuerza de trabajo mundial, situación sin precedentes desde la crisis de los 30 (según un informe

de la OIT de 1995). 35 millones de estos trabajadores se encuentran en los países de la OCDE. Ver, en este mismo número de «Cuadernos del Sur», el artículo de E. Alvater: Sociedad y trabajo, para un análisis de las relaciones entre recesión, especulación y desempleo.

²³ En este sentido, ha comenzado a hablarse desde hace algún tiempo -a partir de directivas del Banco Mundial para los países en desarrollo- de un «giro social» en la política del neoliberalismo. Ver el reportaje a A. Touraine sobre las recientes elecciones «Terminó la limpieza liberal» (Página 12, 21/5).

²⁴ Ver, también en este número de «Cuadernos del Sur», el artículo de M. Durand: Las dos caras de la crisis del trabajo para las luchas de los trabajadores contra el desempleo en la CEE y J.E. Rigdon. Los obreros de EEUU no quieren trabajar horas extras, en «Tesis 11», Nro. 20, Enero-Febrero de 1995, para la lucha que comienza a librarse en el mismo sentido en los EEUU, donde las patronales habían impuesto durante los últimos el promedio de horas de trabajo más alto desde la posguerra, a pesar del creciente desempleo.

